

Surgimiento y efectos de las comisiones extrajudiciales en Uruguay, Chile y Argentina¹

Emergence and Effects of Truth Commissions in Uruguay, Chile and Argentina

Diego SORIA PÉREZ

Universidad de Oviedo, España

diegosoriaperezz@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8696-827X>

Resumen

Cuando las dictaduras cívico-militares del Cono Sur de la segunda mitad del siglo XX llegaron a su fin, los Estados, auspiciados por la presión de las víctimas del terrorismo estatal y sus familiares, pusieron en marcha las comisiones extrajudiciales. Estas estuvieron a cargo de investigar los crímenes cometidos por el Estado con el fin de esclarecer los hechos ocurridos, reparar la memoria y la dignidad de los afectados, y producir una “verdad oficial” reflejada en un informe final que mostrara no sólo las violaciones a los derechos humanos, sino la responsabilidad del Estado como principal culpable de ejercerlas. En este trabajo, se analizarán concretamente las comisiones creadas en Argentina, Chile y Uruguay, así como el proceso transicional posterior a su conformación, con el fin de comprender los diversos procesos que propiciaron en la política, la sociedad y en los tribunales. Para concluir, se pondrán de relieve las similitudes de los procesos transicionales de los tres países, y, sobre todo, las diferencias y el porqué de estas.

¹ El presente trabajo surge a partir de mi Trabajo de Fin de Grado, defendido bajo el título *La efectividad de las comisiones extrajudiciales tras el terrorismo de Estado en América*, en la Universidad de Oviedo en julio de 2025.

Diego SORIA PÉREZ

Surgimiento y efectos de las comisiones extrajudiciales en Uruguay, Chile y Argentina
Sur y Tiempo. Revista de Historia de América, Nº12, julio-diciembre 2025, pp. 150-182.

ISSN 2452-574X

DOI: 10.22370/syt.2025.12.5561



Palabras clave: Terrorismo de Estado; comisión extrajudicial; Derechos Humanos; memoria; verdad; justicia

Abstract

When South American civic-military dictatorships in the second half of the 20th century came to an end, the states, encouraged by the pressure from victims of state terrorism and their families, established the truth commissions. These transitional devices were in charge of investigating the crimes committed by the state, in order to clarify the events occurred, repair the memory and dignity of those who were affected, and produce an ‘official truth’ reflected in a final report that would show not only the human rights violations perpetrated, but also the state’s responsibility. In this project, I will analyze the truth commissions created in Argentina, Chile y Uruguay, as well as the transitional process that followed their work, in order to understand the various processes they fostered in politics, society and in the courts. Finally, the similarities in the transitional processes of the three countries, as well as the differences and the reasons for these differences, will be highlighted.

151

Keywords: State terrorism; truth commission; Human Rights; memory; truth; justice

Introducción

La tensión fruto de la Guerra de Corea supuso un punto de inflexión en el continente americano, que llevó a la instauración de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (Leal, 2003; Tapia, 1980), cuyo objetivo era combatir por medio de la cooperación internacional al que se había constituido como el enemigo interno de los Estados: el comunismo. En el año 1954, se celebró la Décima Conferencia Panamericana en Caracas, en la cual se aprobó una resolución que consideraba que el “movimiento comunista internacional” suponía una amenaza para la soberanía estatal de los países de América Latina (CIPDH, 2016: 28). En ese mismo año, en Paraguay, Stroessner encabezó un golpe de Estado que impuso una dictadura y, meses después,

el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz fue depuesto por el ejército, con apoyo de la CIA por medio de la operación *PB Success*. De este modo, se inició un ciclo de golpes de Estado en multitud de países que llevaron a la conformación de dictaduras cívico-militares que perpetrarían crímenes de lesa humanidad contra sus poblaciones, en pos de eliminar a los “subversivos”.

Para aumentar la colaboración represiva, en noviembre de 1975 representantes de diferentes Fuerzas Represivas del Cono Sur, contrajeron un acuerdo promovido por Estados Unidos: el Plan Cóndor. Se formaron equipos especiales, provistos de documentación falsa para traspasar libremente las fronteras, y se movilizaron grupos paramilitares (CIPDH, 2016: 85). En Paraguay, se encontraron en 1992 los “Archivos del Terror”, que permitieron “comprender el papel de los gobiernos dictatoriales y el rol de la CIA y otras instituciones, en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional” (Cañón, 2016: 195).

Este es el complejo contexto en el que se desenvuelven las dictaduras de Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), los tres casos que se han estudiado para este trabajo. El objetivo que se plantea es el de analizar el funcionamiento de las comisiones extrajudiciales que, en cada uno de esos países, se establecieron para investigar los crímenes cometidos por el Estado. Por medio de la descripción histórica comparada que se pretende llevar a cabo, además de entender las comisiones en el marco de los procesos de justicia transicional, se podrán dilucidar las diferencias y las similitudes que hubo entre ellas y las consecuencias políticas, judiciales y sociales que tuvieron.

Las comisiones de investigación extrajudiciales son los dispositivos transicionales que pusieron en marcha los Estados tras el fin de las dictaduras, que emanan de la presión de la sociedad, de las víctimas y sus familiares (Cañón, 2021a: 177), por conocer la verdad de los hechos ocurridos y reparar su memoria. Carecen de potestad judicial, pero sus investigaciones deben servir de base a los tribunales para procesar a los perpetradores.

Finalizado su mandato, elaboraron un “informe final” que recoge, en líneas generales, las labores realizadas, los objetivos propuestos y la consecución o no de estos. Dicho informe debe reflejar lo que se conoce como “verdad oficial”, que debe

otorgar la posibilidad de “abrir un diálogo público sobre los abusos del pasado, proveyendo del lenguaje de los derechos humanos para discutir eventos que, de otro modo, no serían tratables en la esfera pública” (Richards y Wilson, 2017: 5).

El interés que tiene estudiar las comisiones extrajudiciales nace no sólo de la novedad que supusieron como dispositivo transicional, sino de las obstrucciones interpuestas por los sectores políticos y militares que amparan a los responsables de cometer crímenes de Estado. Así, en Uruguay se promulgó la Ley de Caducidad (1986), que indultó y frenó las investigaciones a militares y policías. En Argentina, se firmaron las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), y se dieron una serie de indultos presidenciales. Y en Chile, se ejecutaron toda una serie de “operaciones de silenciamiento” (Bernasconi y Mansilla, 2023: 134), que incluyeron la imposición del “secreto” sobre todo el acervo documental recopilado y producido por la Comisión Valech (2003-2005). Todas estas acciones pusieron en tela de juicio la labor realizada y frenaron o ralentizaron las posteriores investigaciones y los procesamientos de los culpables.

Las dictaduras de Argentina y Chile son las más representativas por ser las principales bases de operaciones de la Operación Cóndor y por la enorme escala del terrorismo ejercido por el propio Estado. En Argentina, la CONADEP, formada en 1983, fue la primera comisión de la historia, destinada a trabajar sobre uno de los crímenes de lesa humanidad que más huella han dejado en la sociedad: la desaparición forzosa. Por su parte, Chile tuvo dos comisiones: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (creada en 2003; fue la primera a nivel mundial en centrarse en dichos aspectos). Por último, Uruguay es de gran interés tanto por la represión continua del régimen dictatorial, como por las obstrucciones posteriores para evitar la condena de los perpetradores; además, es un caso considerablemente menos estudiado.

El presente trabajo, por tanto, se centrará en analizar las comisiones de investigación de los tres países, empleando para ello los informes de las propias comisiones, al igual que documentos de los poderes legislativos, informes de organismos de derechos humanos y la literatura preexistente sobre esta temática. Los parecidos y las diferencias serán remarcadas en las conclusiones para tratar de arrojar

luz al porqué de los diversos efectos que tuvieron estos dispositivos de justicia transicional tanto en la sociedad, como en el desarrollo político posterior al terrorismo de Estado.

1. Uruguay

1.1. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron

En Uruguay, Sanguinetti llegó al poder en 1985 y, con su política de “cambio en paz”, descartó que las fuerzas de seguridad, responsables del terrorismo de Estado, fuesen juzgadas. La Cámara de Representantes constituyó la que sería la primera comisión extrajudicial que investigaría la desaparición forzosa desde el golpe de Estado de 1973: la *Comisión Investigadora sobre la Situación de las Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron*. En ella, se recogen 164 desapariciones denunciadas, 32 de las cuales se habrían dado en Uruguay. El resto, 127 en Argentina, 3 en Chile y 2 en Paraguay², dan cuenta de la cooperación internacional de las dictaduras del Cono Sur. También, se dictaminó que se ejerció tortura en los secuestros y que, incluso, hubo menores desaparecidos entregados a familiares de los perpetradores.

Cuando finalizó su labor, trasladó todo lo actuado al Poder Judicial para que investigara los hechos denunciados. Sin embargo, la justicia militar empezó a presionar frente a las denuncias que llegaban a los juzgados. El empeño de los militares no cesó, y el presidente Sanguinetti envió un proyecto de ley para amnistiar a los miembros de las fuerzas del orden, evitando así que pudieran ser investigados por su participación en las desapariciones.

² <https://comisiones.museodelamemoria.cl/2016/11/14/comision-investigadora-sobre-la-situacion-de-las-personas-desaparecidas-y-hechos-que-la-motivaron/>

1.2. Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado

El parlamento uruguayo se opuso y las demandas tramitadas por las víctimas y sus familiares llevaron a las primeras citaciones de militares. Se dio entonces una confrontación entre el Poder Judicial y el ministro Chiarino, quien acabó promulgando la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”³. Esta declaraba en su primer artículo la caducidad del “ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos [...] por funcionarios militares y policías”, argumentando que estaban “cumpliendo órdenes”. De este modo, todas las causas se paralizaron y archivaron.

Desde entonces, la asociación de “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos” recolectó firmas para tratar de llevar ante el gobierno una propuesta de referéndum para revertir la situación. El “voto verde” (1989) trató de derogar la Ley de Caducidad para poder reanudar los juicios a los perpetradores; sin embargo, no consiguió el apoyo parlamentario necesario. Años después, la sociedad civil inició la conocida como “Marcha del Silencio”, convocada el 20 de mayo de 1996 y celebrada desde entonces en esa misma fecha todos los años. Ese día, se conmemoraba el vigésimo aniversario de la muerte de cuatro uruguayos asesinados en Buenos Aires: dos legisladores que se exiliaron en Argentina tras la disolución de la Asamblea General, y dos miembros del MLN-T (Broquetas, 2007: 226).

A estas demandas de la sociedad civil, se sumó el caso del poeta argentino, Juan Gelman. Su hijo y su nuera fueron secuestrados en 1976. La muerte de Marcelo Ariel se confirmó en 1989, pero se supo que su mujer, embarazada, había sido trasladada a Uruguay, donde dio a luz en un hospital militar y falleció en algún momento sin determinar. La posibilidad de que su nieta estuviera viva le impulsó a exigir al gobierno la investigación del caso para poder identificarla; pero Sanguinetti se negó. En 1999, se la pudo encontrar gracias al apoyo que recibió por parte de, entre otros, el diario *La República* y, al mismo tiempo que el presidente fue sucedido por Jorge Batlle en el 2000, se consiguió confirmar su identidad. Se llamaba Macarena, y había

³ Ley N.º 15.848. Promulgada el 22 de diciembre de 1986. IMPO. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15848-1986/1>.

sido entregada a los dos meses de nacer a un comisario de policía, como si de un “regalo de Navidad”⁴ se tratase.

1.3. COMIPAZ y Secretaría de Seguimiento de la COMIPAZ

Las tensiones fruto de la nula colaboración del Estado uruguayo para localizar a Macarena y a los demás desaparecidos bajo la dictadura, junto con el cambio de gobierno, impulsaron la creación de la Comisión para la Paz (2000), cuyo informe final fue publicado en el año 2003.

El informe de la comisión asegura que murieron 24 personas en Uruguay y que, según la información recabada, todos ellos habrían sido exhumados de los centros en los que estuvieron internados a finales de 1984, poco antes de la vuelta a la democracia, para ser incinerados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata (COMIPAZ, 2003: III > B > B.2).

Esta destrucción de pruebas que pudieran incriminar a los miembros de las Fuerzas Armadas generó una polémica significativa, al haberse implementado después de que se firmara el Pacto del Club Naval, acuerdo clave para la transición democrática por la vía pacífica. De ello dio cuenta “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos” en un comunicado lanzado el mismo día en el que se publicó el informe de la comisión⁵. En este, agradecían el trabajo realizado, pero, a su vez, planteaban dudas como quiénes fueron los responsables de cremar los cuerpos, y si los militares contaron con el beneplácito político para ello. A su vez, mostraron su preocupación por que el trabajo de la COMIPAZ no supusiera un “punto final”, sino un comienzo. Familiares rogaba que no se obstaculizara la labor de la Justicia una vez se pusiera a investigar lo expuesto por el informe, a la par que exigían saber qué ocurrió con Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, aquellos políticos asesinados en Buenos Aires cuyo caso inició la Marcha del Silencio, pues sus nombres no son mencionados en la

156

⁴<https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/202002/GELMAN%20GARC%C3%8DA%2C%20Mar%C3%ADA%20Macarena%20Ficha%20accesible.pdf>.

⁵ *Comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. Asunto: Pronunciamento ante informe de la Comisión para la Paz (10.04.2003)*. Disponible en: <https://desaparecidos.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/2003.04.10-Pronunciamento-ante-informe-de-la-Comisi%C3%B3n-para-la-Paz.pdf>.

publicación.

La acción de exhumar y cremar los muertos enterrados en los campos de internamiento fue denominada Operación Zanahoria. En los años posteriores al trabajo de la COMIPAZ, el hallazgo de cadáveres aún enterrados en los centros puso en duda la veracidad de los hechos. Un ejemplo es el de Julio Gerardo Castro Pérez, un profesor, político y periodista que, supuestamente, había sido uno de los exhumados; en 2011 sus restos fueron encontrados enterrados en un cuartel militar⁶.

Habría de esperar hasta el año 2002 para poder ver el primer juicio a uno de los perpetradores de crímenes de Estado. Juan Carlos Blanco Estradé, canciller de la República, fue procesado por la desaparición de Elena Quinteros. En 2010, fue condenado a veinte años de cárcel. También se le imputó otro delito de homicidio “muy especialmente agravado” junto al dictador Bordaberry en 2006 por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez y los otros dos miembros de Tupamaros secuestrados en 1976, William Whitelaw y Rosario Barredo; se les impuso una condena de treinta años de cárcel. Bordaberry, por su parte, recibió otra pena de treinta años de prisión por diez delitos de homicidio y por “atentado a la Constitución” con nueve crímenes de desaparición forzada y dos homicidios políticos⁷.

Una vez finalizada la investigación de la COMIPAZ sobre los detenidos y los menores de edad desaparecidos, el Poder Judicial contó con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, entregando toda la documentación que requirieran para los procesamientos penales. Al mismo tiempo, fue crucial el trabajo conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense para potenciar la labor de los bancos genéticos y estudios forenses. Para prosperar en las investigaciones forenses y archivísticas, la Secretaría se vinculó a la Universidad de la República mediante un convenio en 2005. La Secretaría tuvo como objetivos unificar criterios de actuación con los archiveros, historiadores, antropólogos y jueces para coordinar su trabajo de manera efectiva; y cumplir con la sentencia de la CIDH⁸ sobre

⁶ <https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/201911/CASTRO%2C%20Julio%20Ficha%202018%20accesible.pdf>.

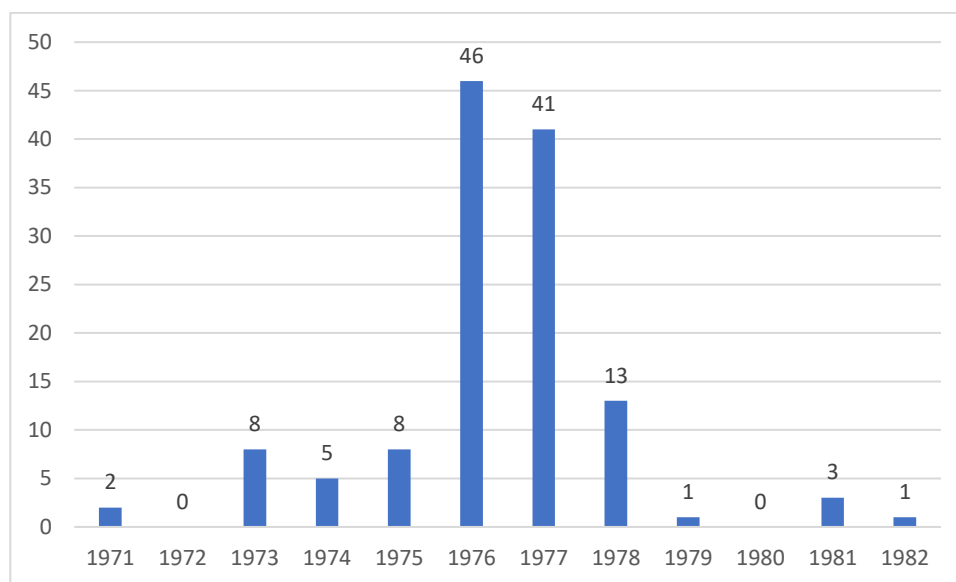
⁷ <https://sitiosdememoria.uy/bordaberry-arocena-juan-maria>.

⁸ https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf.

el caso “Gelman vs. Uruguay”. Para ello, procedieron a gestionar el pago de las indemnizaciones pertinentes y a ampliar la búsqueda del cuerpo de María Claudia García, la madre de Macarena Gelman⁹.

Las investigaciones de los historiadores y antropólogos efectuadas en el convenio entre la UDELAR y la Secretaría fueron publicadas en el 2007. Se pudo confirmar la desaparición de 128 uruguayos (Presidencia de la República, 2007: 171). En la sección dedicada a los centros de detención públicos y clandestinos se presentaron un total de treinta sitios, repartidos entre Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, en los cuales se vieron por última vez a ciudadanos uruguayos, o bien se han encontrado cuerpos enterrados (Presidencia de la República, 2007: 347).

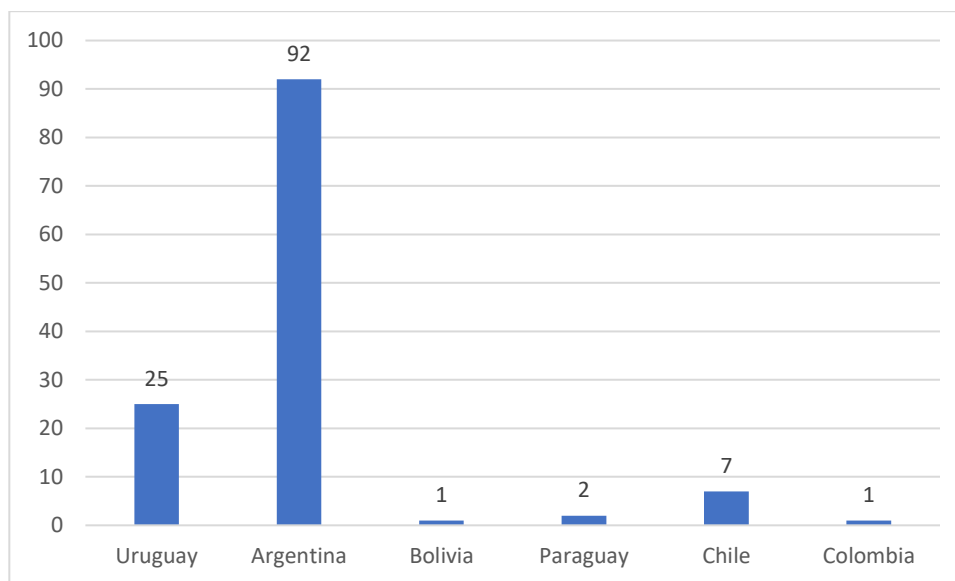
Gráfico 1. Detenidos desaparecidos por año según la investigación del Equipo Universitario



Elaboración propia, a partir de Presidencia de la República (2007: 171).

⁹ Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *Memoria anual 2011*. Disponible en: https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/mem_anual/presidencia/paz.pdf.

Gráfico 2: Detenidos desaparecidos según país de detención



Elaboración propia, a partir de Presidencia de la República (2007: 171).

Mientras tanto, la segunda tentativa para derogar la Ley de Caducidad se dio en otra votación celebrada en 2009: un plebiscito que pretendía acabar en concreto con los cuatro primeros artículos que permitieron amnistiar o no investigar a policías y militares. El fracaso de este le valió al Estado uruguayo la condena de Human Rights Watch por la incompatibilidad del derecho internacional con la Ley de Caducidad, por la obligación que tienen los gobiernos de “proveer un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo cual incluye justicia, verdad y reparaciones adecuadas”¹⁰.

El rechazo mostrado por Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la CIDH propiciaron la promulgación en 2011 de la Ley 18.831, que anulaba la Ley de Caducidad y restablecía la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, Abraham et al. (2022: 78) señalan que la efectividad de la ley fue limitada, a pesar de que permitiera reabrir o iniciar nuevas causas. A julio de 2024, han sido condenadas, únicamente, 41 personas, la mayoría por homicidio, privación de libertad o lesiones¹¹; como si se

¹⁰ <https://www.hrw.org/es/news/2009/10/27/uruguay-el-resultado-del-plebiscito-ha-sido-un-golpe-para-la-justicia>.

¹¹ Datos disponibles en la lista de condenados elaborada por el Observatorio Luz Ibarburu: <https://observatorioluzibarruru.org/media/uploads/news/attachments/CONDENADOS%20JULIO%202024%20-%20Hoja%201-2%20m.pdf>.

tratase de asesinatos que actuaron individualmente, y no como parte de un operativo represivo en funcionamiento a nivel estatal.

Además, Guido Manini Ríos y su partido, Cabildo Abierto, llevan desde 2019 tratando de llevar adelante una iniciativa que permita reinstaurar la ley porque su derogación no permite “pasar página” y está “con falsos testimonios llevando a inocentes presos” (Vera, 2020), perpetrándose así los discursos negacionistas y relativistas.

1.4. Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia

La Secretaría de Seguimiento de la COMIPAZ fue sucedida por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (2013) para ampliar las investigaciones y la colaboración con los jueces y fiscales¹². Se convirtió en el soporte administrativo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, conformado en 2015 para, entre otros cometidos, digitalizar “toda la información existente y la que se logre incorporar de manera que permita el acceso, análisis, detección y cruzamiento de la información de forma ágil y fidedigna”¹³.

El GTVJ concluyó su trabajo en 2019, con la emisión de su correspondiente informe. En él, explican que el integrante en representación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos abandonó el Grupo en febrero de 2018 por “desavenencias con el Poder Ejecutivo” (GTVJ, 2019: 4). En un comunicado redactado por Familiares¹⁴, se explica que la interdependencia entre el SDHPR y el GTVJ provocó que los avances fuesen muy lentos, al igual que se vieron sobrepasados por la multitud de tareas que les fueron otorgadas, y que la burocracia estatal fue un óbice que ralentizó la culminación de sus obligaciones. También, denunciaron que los archivos de las dependencias militares, salvo los de la DNII, estaban incompletos, “lo que

¹² Resolución N.º 463/013. Promulgado en 1 de agosto de 2013. IMPO. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/463-2013>.

¹³ Decreto N.º 131/015, Capítulo I, Artículo 3.6. Promulgado el 19 de mayo de 2015. IMPO. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/131-2015>.

¹⁴ <https://desaparecidos.org.uy/2018/02/>.

terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos”. La principal crítica, por tanto, reside en la falta de firmeza del gobierno frente a las Fuerzas Armadas, que siguen negándose a entregar información que permitiría encontrar a muchos de los desaparecidos, y continúan usando dilaciones en los juicios para evitar ser condenados.

Al igual que se hizo en 2005, se firmó un nuevo convenio con la Universidad de la República, pero la falta de armonía entre ambos “fue un factor distorsionante de la actividad”, aunque sí fue fructífero en la digitalización de la documentación (GTVJ, 2019: 10 y 18). La memoria final, antes de abordar los logros acometidos, deja una afirmación lapidaria: “[...] la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido un factor altamente negativo. La percepción que un Poder del Estado no cumple su cometido [...], termina consolidando la idea de que el Estado en su conjunto viola una vez más la dignidad de las víctimas y sus familiares” (GTVJ, 2019: 19).

En la página web del gobierno uruguayo, en la sección de la SDHPR, se encuentran las diferentes listas de detenidos, desaparecidos o asesinados, que se elaboraron¹⁵. Entre ellas, destaca una que hace recuento de los niños que fueron secuestrados y apropiados, a los cuales se les restituyó la identidad; y otra en la que se muestran los “N.N.”, víctimas de los vuelos de la muerte, que aparecieron en las costas uruguayas y que fueron enterradas con esas siglas, que significan “Ningún Nombre”.

161

Tabla 3. Víctimas según el caso definido

Detenidos desaparecidos	Asesinados políticos (1968-1973)	Asesinados políticos (1973-1985)	Niños apropiados con identidad restituida	N.N. hallados en costas uruguayas
197 (3 adolescentes)	80	122	13	31 (10 identificados)

Elaboración propia, a partir de las listas confeccionadas por la SDHPR y el GTVJ.

¹⁵ Disponibles en: <https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/victimas>. Cabe destacar que algunas no cuentan con datos actualizados más allá de 2014, previo a la constitución del GTVJ.

2. Chile

2.1. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

En Chile, se dio una transición pactada en la cual los militares mantuvieron altas cotas de su influencia en las directrices del Estado (Grosso en Bernasconi y Mansilla, 2023: 137). En 1990, el presidente Aylwin pidió disculpas públicas por los crímenes cometidos y puso en marcha la que sería la primera comisión extrajudicial tras el régimen de Pinochet: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo informe final se publicó en 1991.

Esta primera comisión se encargaría de calificar las situaciones de las personas detenidas, ejecutadas y torturadas hasta la muerte por parte del Estado. Junto con su continuadora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1996), se reconocieron a 2.774 víctimas de violaciones a los derechos humanos y 423 víctimas de violencia política (Bernasconi y Mansilla, 2023: 137).

La CNVR tuvo un alcance limitado en tanto que no sirvió de impulso para que la justicia llamara a declarar a los responsables. Además, diversos sectores de las Fuerzas Armadas ejercieron presión, incluso en prensa, reclamando objetividad y contextualización de los hechos (Bernasconi et al., 2019: 39). Es decir, que pusieron en marcha una de las formas de negacionismo propia de este tipo de pasados traumáticos, que es equiparar los cometidos por los grupos de izquierdas con los que perpetró el Estado con toda su maquinaria nacional y, en este caso, internacional, dentro del Plan Cóndor.

2.2. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

A lo largo de la década de los 90 surgieron demandas desde movimientos sociales para que la investigación fuera revisada y se contabilizaran a las víctimas de tortura y prisión política. Así fue cómo la presión de la sociedad chilena, sobre todo a partir de la orden de arresto internacional (1998) contra Pinochet (Bernasconi et al., 2019: 40), condujo al presidente Lagos a crear, en 2003, la Comisión Valech.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, también

conocida como Comisión Valech, funcionó en dos etapas, las cuales llevaron a cabo sus respectivas investigaciones y sus consecuentes informes: la Valech I, que operó entre el 2003 y el 2005; y la Valech II, que hizo lo propio entre 2010 y 2011 para evaluar nuevos casos.

La creación de la comisión fue una de las medidas que formaban parte de la propuesta de Lagos “No hay mañana sin ayer” (CNPPT, 2005: 21). El decreto publicado en el *Diario Oficial* para su creación establecía que la comisión “debía determinar quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y proponer medidas de reparación” (CNPPT, 2005: 21).

La investigación de la Valech I concluyó con la calificación de hasta 27.255 víctimas de prisión política, de las cuales el 94% señaló haber sufrido torturas (CNPPT, 2005: 74 y 208). Se identificaron 1.132 recintos, una cantidad lo suficientemente significativa como para afirmar la existencia de una represión centralizada y planificada a escala estatal y fuertemente intensiva (CNPPT, 2005: 261; Bernasconi y Mansilla, 2023: 137). La Valech II sumó otras 9.795 víctimas de prisión política y tortura, 30 de ellas mortales (Valech II, 2011: 47), dejando un saldo de más de 35.000 víctimas.

163

2.3. Operaciones de silenciamiento y “verdad residual”

Sin embargo, hubo víctimas y familiares que no prestaron declaración ante los comisionados, por diversos motivos: miedo, desconfianza, inseguridad e, incluso, desconocimiento. Se debe destacar la sensación que muchos declarantes tuvieron sobre la visión que la comisión tuvo sobre ellos; este hecho lo destacó Haydée Oberreuter, una presa política de la que se hará mención más adelante, con las siguientes palabras: “[el informe las considera] personas enfermas, personas-víctimas [...] necesitando que otros nos cuidaran y protegieran” (Bernasconi et al., 2019: 42).

Desde luego, la desconfianza hacia el Estado que pocos años atrás había atentado contra sus vidas, y el trauma que supone para muchas de ellas revivir lo ocurrido, son factores que influyeron en su decisión; sirva de ejemplo el siguiente

testimonio de un hombre detenido en Santiago en 1973, con sólo 20 años: “[...] quedé demasiado mal como para repetir esos momentos, [...] memorizarlos es un dolor y un martirio” (CNPPT, 2005: 504).

Este “derecho al silencio” lo que provocó es que si no aparecía documentación que se pudiera adjuntar a la carpeta del caso, su veracidad podría resultar demasiado endeble. Esto supuso un problema si se tiene en cuenta que el 67,4% de los casos reconocidos por la comisión, no fueron registrados por ningún organismo de derechos humanos en la época, puesto que estos fueron creados con posterioridad al periodo en el que el informe observó que se dieron la mayor cantidad de víctimas de prisión política y tortura: del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 1973 (CNPPT, 2005: 72).

La CNPPT debió enfrentarse a otros problemas a medida que iba desempeñando sus funciones. Por ejemplo, el caso de Haydée Oberreuter es una muestra de cómo hubo personas que decidieron ejercer este derecho al silencio, como una señal de protesta. Oberreuter fue detenida junto con su madre y su hija, estando embarazada. Perdió a su hija en un aborto forzado, fruto de los tormentos que sufrió. Cuando fue llamada a declarar en la Valech I, decidió no hablar porque su madre y su hija no contaban con registros propios, al ser consideradas “víctimas colaterales” y no directas de la represión. Su caso trascendió hasta el punto en el que su madre, que había fallecido con anterioridad a la creación de la comisión, acabó siendo calificada como víctima directa; y su hija fue inscrita bajo una categoría denominada “menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres”. Sin embargo, su hijo nonato fue calificado fuera de mandato, al no ser una situación prevista cuando se creó la comisión. Tan sólo se concedió reconocer a víctimas que estuvieran en gestación o que fueran concebidas por medio de violaciones sexuales.

El caso de Haydee es de gran trascendencia para comprender que el análisis de los testimonios de manera individualizada es problemático; una lógica que fue la que siguió la CNPPT a la hora de elaborar su categoría de víctima. Es decir, que el objetivo inicial de la comisión de reconocer a las víctimas de prisión política y de tortura, se antojó más complejo de lo que cabía esperar por la propia definición de lo que debe ser considerado una víctima de crímenes de lesa humanidad.

La producción de la verdad oficial no consiste en la acumulación erudita de datos, sino que las comisiones siguen una serie de operaciones de selección y exclusión, jerarquizando o clasificando toda la información adquirida por la comisión. Así, uno de los procedimientos de la comisión extrajudicial es la “operación de destilación”, en la cual se separan los elementos que conforman los testimonios de las víctimas, con el fin de producir la “verdad oficial”. Sin embargo, esto genera otro tipo de verdad, calificada como “residual”, que es toda información recabada que no se vería reflejada en el informe final: procedimientos, documentos, declaraciones, etc. Son verdades excluidas por no ser contempladas en los criterios establecidos al momento de crear las comisiones y, por ende, silenciadas, al no ser incluidas en el informe final.

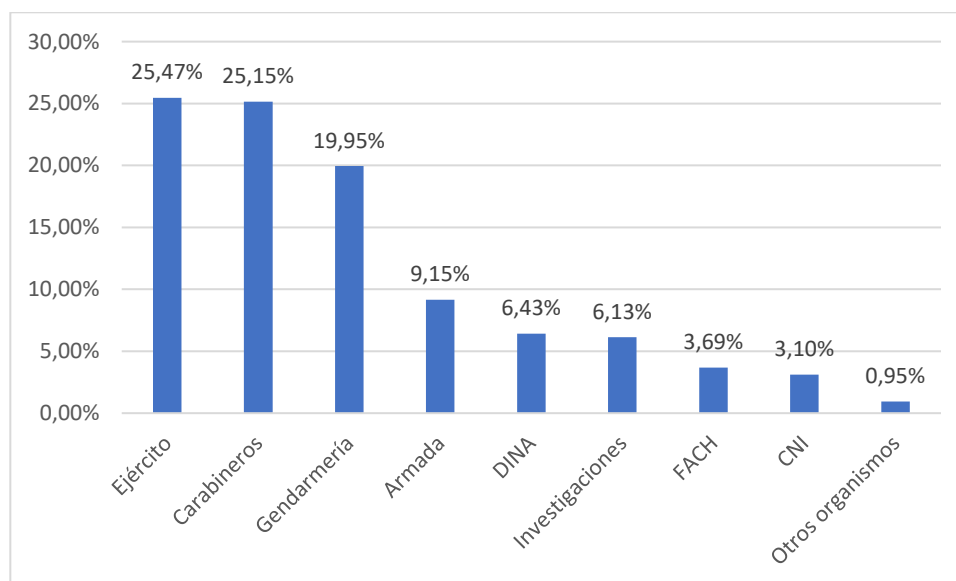
Un ejemplo de verdad residual es la relacionada con nombres de responsables de llevar a cabo torturas y demás crímenes relatados por aquellos que los sufrieron y sus familiares. Esta trascendental información no tenía un campo asignado en las fichas de ingreso para poder ser reflejada, lo cual implicaba la necesidad de agregar anexos por parte de declarantes o funcionarios para dar a conocer esos nombres. Este silenciamiento de la verdad se produce mediante “destilación por mandato” (Bernasconi y Mansilla, 2023: 143), ya que esa información sí es recabada, pero, por mandato, se decide que no debe ser recogida.

Otra operación de destilación es la “generalización”, la cual se produce cuando se trata de construir la verdad oficial, abstrayendo lo que tienen en común los relatos y la información recabada de cada caso, con el fin de formular un relato homogéneo. Esta acción sirve para elaborar el perfil de la víctima y el tipo de tortura por la que atravesó, y conlleva la transformación de parte de la información en “residuo” y, en definitiva, alterar “la composición narrativa del declarante” (Bernasconi y Mansilla, 2023: 145 y 147). Esto es algo que sucedió también en el caso argentino como explica Feld (2015), pues la composición del relato oficial prioriza los hechos fácticos en sí, y deslegitima o no otorga la importancia que tiene la subjetividad del declarante.

En cualquier caso, la Comisión Valech I tuvo un papel clave para la puesta en conocimiento de los centros de detención. El capítulo “Recintos de detención” del informe está enteramente dedicado a esta cuestión. Los centros están distribuidos

dentro de cada región, distinguiendo hasta doce diferentes, más la Metropolitana de Santiago. Contiene datos sobre las características de cada uno, su periodo de funcionamiento, el organismo a cargo de cada recinto, o los que destacaron por sus duras condiciones.

Gráfico 4. Detenciones calificadas en recintos según organismo a cargo



Elaboración propia, a partir de CNPPT (2005: 262).

2.4. Imposición del “secreto”

Sin duda, uno de los elementos más importantes a destacar de la comisión fue la imposición del secreto. A raíz de la promulgación de la Ley 19.992 de 2004, la CNPPT se convirtió en la única comisión del mundo que impuso un “secreto total”, que cerraba completamente a la justicia la posibilidad de acceder a la información, más allá del informe final, por un periodo de cincuenta años¹⁶.

El caso de la Valech II fue distinto. El secreto, en un principio, se aplicó de la misma forma. Pero el INDH, en el año 2014, recurrió ante la Contraloría, que resolvió en favor de aquellos, declarando que la documentación tenía carácter reservado, pero

¹⁶ Ley N.º 19.992, Título IV, Artículo 15. Promulgada el 17 de diciembre de 2004. Diario Oficial. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=233930>.

no secreto (Bernasconi et al., 2019: 43). Aun así, la multitud de carpetas de la Valech I, continuaron bajo secreto. El mensaje presidencial en la Ley 19.992 decía que este, “deja a salvo el derecho de las víctimas, que son los únicos titulares de dicha información, de disponer de ella como estimen conveniente” (BCN, 2004: 20).

Es llamativo el hecho de que recalque que las víctimas son las dueñas de sus carpetas ya que, en la práctica, esto no fue así. Esta política chocó frontalmente con el interés de los supervivientes y sus familiares, quienes demandaban el conocimiento de la verdad como un derecho colectivo que se encuentra por encima del derecho a la privacidad de los perpetradores. Su imposición deja ver que la producción de la verdad oficial en el informe de la comisión por parte del Estado chileno no contempló otros usos más que el de ser reflejada en el propio informe, dejando atrás el objetivo del “nunca más” y cualquier otra acción que sirviera para cumplir con el deber de no repetición (Bernasconi y Mansilla, 2023: 149).

2.5. Desclasificación Popular y “tachaduras”

167

Ante esta situación, la respuesta de la sociedad, nuevamente, no se hizo esperar. Ex presos políticos del MIR, y sectores de la política, la abogacía y del arte, fundaron el colectivo Desclasificación Popular. Este grupo presionó al gobierno para conseguir que el secreto oficial fuera eliminado y que los que presentaron sus testimonios pudieran tener las carpetas de sus casos, que estaban custodiadas por el INDH.

Abogados de DP solicitaron al INDH la custodia legal de los archivos, a lo cual accedieron, salvo por la documentación relacionada con el trabajo de la comisión. Los abogados interpellaron esa decisión, y la justicia falló en su favor, consiguiendo por primera vez desclasificar todos los documentos de un caso. Esto ocurrió en diciembre de 2015; ya en septiembre de ese mismo año, se dieron las primeras desclasificaciones, cuando doce ex presos políticos lograron que el INDH les entregara la documentación de sus casos, pero sólo de manera parcial (Mansilla, 2022: 115).

El trabajo de la asociación fue trascendental para devolver al declarante, el control sobre el testimonio de su pasado reciente para participar en la reparación de su memoria y en la construcción de la verdad (Bernasconi et al., 2019: 46). Usando su

página web, en la que albergaban la documentación de aquellos testimoniantes que desearan donar sus carpetas, DP pretendía llevar a cabo una labor educativa, además de permitir establecer correlaciones y cruzar información (Bernasconi et al., 2019: 44).

Lo que estaba haciendo Desclasificación Popular, en la práctica, era crear un archivo paralelo al de la Valech, el cual podría acabar siendo usado ante la imposibilidad de hacerlo con el de la comisión, por los tribunales. En la siguiente tabla se muestra que el INDH ha hecho entrega de manera directa a los tribunales de, solamente, cuatro carpetas de la Valech I, con el proceso de revictimización que ello implica para los afectados:

Tabla 5. Entrega de la documentación de la CNPPT por el INDH. Datos actualizados a 30 de septiembre de 2025

Vía de entrega	Carpetas Valech I	Carpetas Valech II	Total
Requerimiento de tribunales	4	1.075	1.079
Personalmente a requerimiento de particulares	9.833	3.721	13.604
TOTAL	9.887	4.796	14.683

Elaboración propia a partir de la tabla disponible en: <https://www.indh.cl/destacados-indh/comision-valech/>

En cualquier caso, y como señaló acertadamente Oberreuter, el proceso de desclasificación ha permitido a los supervivientes recuperar la autoría sobre el testimonio de su pasado reciente; formar parte del proyecto de reparación de la memoria y no ser una simple víctima “enferma” y expectante (Bernasconi et al., 2019: 46).

Sin embargo, este hecho dio lugar a un nuevo intento de silenciamiento de la verdad: las “tachaduras”. De nuevo, bajo la premisa de proteger el derecho a la

privacidad, la verdad residual a la que, desde este momento, se tenía acceso, se vio opacada por los tachones sobre datos relacionados con terceros, como por ejemplo los nombres de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. El INDH incluso aseguró que emprendería acciones legales contra todo aquel que recurriera ante la institución por el secreto o por las tachaduras¹⁷. Lo que provoca la operación de tachar es evidente: la fragmentación de la información, dificultando la comprensión de lo recogido en los documentos desclasificados.

Estas acciones de silenciamiento descritas para el caso chileno son las que el Estado puso en marcha para publicar un informe final que reflejara una verdad oficial que contentara a la mayor parte de la sociedad y, al mismo tiempo, hacer que la verdad que incomodaba se convirtiera en residual. Son varios los intentos por parte de miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados de sacar adelante proyectos de ley que modifiquen la Ley 19.992, y continuar con aquello que inició DP. Pero, por el momento, ninguno de ellos ha salido adelante.

3. Argentina

3.1. CONADEP y el informe *Nunca Más*

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas estuvo en funcionamiento desde diciembre de 1983 hasta septiembre de 1984 para, finalmente, publicar el famoso informe *Nunca Más*. El informe refleja la existencia de, aproximadamente, 340 centros clandestinos de detención, presentes en todo el territorio nacional, y de los cuales presenta multitud de fotografías, planos y mapas para visualizar su organización interna, a la par que su magnitud en cuanto al número de ciudadanos secuestrados se refiere. Unos centros cuya existencia, a pesar de la evidente intención de someter y deshumanizar a las miles de personas allí recluidas ilegalmente, era permanentemente negada por parte de Videla y los miembros de la Junta Militar (CONADEP, 1985: 54-55 y 447). La Subsecretaría de Derechos Humanos elaboró un mapa en 2022 en el que se añadieron los CCD descubiertos en

¹⁷ Acta del Consejo del INDH, sesión 322, 26 de septiembre de 2016. Disponible en: <https://www.indh.cl/transparencia/wp-content/uploads/2016/10/acta-sesion-322.pdf>.

investigaciones posteriores, dando muestra de la existencia de un total de 814 centros durante la dictadura del PRN¹⁸.

El informe *Nunca más* constató la desaparición de 8.961 personas desde el golpe de marzo de 1976, hasta 1983. Esta es una cifra que, claramente, no refleja la totalidad de las víctimas sometidas a desaparición forzosa por parte de la dictadura, pues la lista fue confeccionada en base a las denuncias recibidas por la comisión y por las que ya habían sido elaboradas por organizaciones de derechos humanos. También, como sucedería con las comisiones chilenas, hubo desapariciones no denunciadas por desconocimiento, o, directamente, porque no tenían familiares que pudieran dar a conocer su paradero desconocido. Estas u otras situaciones similares se dieron especialmente en entornos alejados de ciudades (CONADEP, 1985: 293).

Los funcionarios de la comisión elaboraron una serie de datos estadísticos para dilucidar los diferentes perfiles de los damnificados. Si atendemos a los grupos de edad, la mayoría de los desaparecidos tenían entre 16 y 35 años; y según su ocupación, el 30,2% eran obreros y el 21%, estudiantes (CONADEP, 1985: 293-294). En cuanto al porcentaje de desapariciones por año, son destacables dos cuestiones. La primera, es que contabilizan las que se dieron entre 1973 y 1975, antes del golpe de Estado. Esto se debe a que la violencia estatal ya venía de atrás, con la represión ejercida contra la JCR y su representación argentina en el PRT; una “*prueba piloto* de una metodología que a partir de 1976 adquiere contornos mucho más dramáticos, cuantitativa y cualitativamente” (CONADEP, 1985: 299). En segundo lugar, el caso argentino no difiere de la mayoría de los totalitarismos en el hecho de que el periodo de mayor represión corresponde a los primeros años del régimen (CONADEP, 1985: 298).

Como es habitual, sectores de las Fuerzas Armadas no colaboraron con la CONADEP durante el desempeño de sus funciones, ni en la investigación de sus miembros durante el Juicio a las Juntas. De ello da cuenta el informe de la comisión, la cual solicitó documentación a diversos entes que permitiera conocer su organigrama y los nombres de sus miembros, buena parte de la cual no fue entregada

¹⁸ Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/rutve/mapas>.

por “razones burocráticas” y otras que desconocían (CONADEP, 1985: 452-453). Para impedir que los integrantes de las Fuerzas Armadas se escudaran en el “secreto militar”, los comisionados transmitieron la problemática hasta la instancia presidencial (CONADEP, 1985: 453). Esto hizo que el Congreso sancionara la Ley 23.049¹⁹, que traspasó la competencia a la justicia ordinaria.

3.2. Juicio a las Juntas y Leyes de Punto Final y Obediencia Debida

El Juicio a las Juntas comenzó en abril de 1985. En él quedó probada la existencia de un aparato clandestino orquestado por el Estado, que violaba su propia ley para llevar a cabo una represión sistemática contra todo ciudadano que pudiera ser considerado subversivo. Se practicaron detenciones, secuestros, torturas y asesinatos, todo ello bajo un estricto secreto. Estos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados por Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, siempre bajo la dirección de la Junta Militar, directa o indirectamente. La labor llevada a cabo por la CONADEP, que sirvió de base para las acusaciones de la fiscalía, hizo posible que, por primera vez en la historia, un grupo de dictadores fuera obligado a “comparecer ante los tribunales de su propio pueblo para ser juzgados” (Donadio, 2022: 95-96).

Esta etapa de la CONADEP y de transición democrática argentina dio un vuelco en abril de 1987. Durante la Semana Santa de aquel año, el ejército, capitaneado por Aldo Rico, se sublevó contra el gobierno de Alfonsín. Aunque no triunfaron, supuso un retroceso en materia de memoria, verdad y justicia (Donadio, 2022: 97). Ya un año antes se había publicado la ley de Punto Final²⁰, que impuso una caducidad en los hechos imputados a los responsables de participar en las desapariciones forzosas de sesenta días después de su promulgación. Fue después de la sublevación cuando se impuso otra polémica ley: la de Obediencia Debida²¹. Esta estableció que los grados militares por debajo del de coronel, salvo excepciones, no podían ser imputados por

¹⁹ Ley N.º 23.049. Sancionada el 9 de febrero de 1984. BORA. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23049-28157/texto>.

²⁰ Ley N.º 23.492. Sancionada el 23 de diciembre de 1986. BORA. Disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm>.

²¹ Ley N.º 23.521. Sancionada el 8 de junio de 1987. BORA. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23521-21746>.

sus crímenes porque tenían una “obediencia debida” para con sus superiores. De esta forma, el gobierno de Alfonsín interrumpió los juicios que se estaban llevando a cabo y, buena parte de los perpetradores del terrorismo estatal, quedaron en la práctica amnistiados entre 1989 y 1990 (Cañón, 2021b: 142).

La sociedad argentina se puso en pie para reclamar justicia, destacando grupos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo o HIJOS, que contaron con la solidaridad nacional e internacional. Se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, y el Equipo Argentino de Antropología Forense dio un salto cualitativo de gran importancia. Todos ellos lucharon por, al menos, perseguir los crímenes que sí fueran imputables a pesar de las mencionadas leyes, como son los traumáticos secuestros de cientos de niños.

En 1998 la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por Carmen Aguiar de Lapacó en el que solicitaba, con el apoyo de diversas organizaciones, conocer lo que ocurrió con su hija desaparecida, debido a la interferencia de las Fuerzas Armadas y sus abogados para detener la investigación. La decisión, que contravenía diversos tratados internacionales en los cuales Argentina estaba involucrado, llevó a que, poco después, la Corte aprobara de forma unánime otro recurso presentado, esta vez por Facundo Urteaga, cuyo hermano había desaparecido; un recurso en el cual se vio la posibilidad de emplear el *habeas data*, una acción jurídica contemplada en la Constitución que permite a cualquier ciudadano recopilar la información existente sobre ellos mismos, extrapolándolo a la demanda por averiguar el paradero de los familiares desaparecidos (Andriotti, 2013: 11).

172

3.3. Juicios por la Verdad y derogación de las leyes de PF y OD

Este fallo de la justicia fortaleció el desarrollo de los llamados Juicios por la Verdad. Iniciados en abril de 1998, se trató de una novedosa herramienta de justicia transicional, al ser la primera instancia de la justicia penal en el mundo que tenía como objetivo conocer la verdad (Andriotti, 2013: 6). En 2001, la sentencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 declaró la anticonstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, a la par que afirmó la incompatibilidad de estas con el derecho internacional: “el CELS sostiene que la

represión llevada a cabo por el último gobierno militar dejó un saldo de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, y que estas violaciones quedaron sin castigo en virtud de las mencionadas leyes y de los indultos presidenciales”.²²

En agosto de ese mismo año, el Congreso de la Nación decretó la Ley 25.779²³, que declaraba “insanablemente nulas” aquellas que tanto habían obstaculizado el avance de la justicia transicional en el país. Al mismo tiempo, se promulgó la Ley 25.778²⁴, que otorgaba a la *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad* de las Naciones Unidas la jerarquía constitucional, ya que, en los estatutos de esta, se explica que “la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables”²⁵.

Los tribunales consiguieron establecer la vinculación *ius cogens* de la legislación argentina con el derecho internacional, supeditando la una sobre la otra. Esto significó que el argumento de que la ley suprema durante la dictadura fueran las *Actas del Proceso de Reorganización Nacional*, adquiriese nula validez. El propio Estado había ratificado, en diciembre de 1972, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados²⁶, en cuyo artículo 27 se decretaba, precisamente, la preponderancia del derecho internacional, a la par que el artículo 53 declaraba nulas todas las normas que atentaran contra este (Donadio, 2022: 106).

²² Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4. Juez Gabriel Cavallo. Causa Nro. 8686/2000 “Simon, Julio, Del Cerro, Juan Antonio s/sustracción de menores de 10 años” del registro de la Secretaría 7. 6 de marzo de 2001. Disponible en: <http://hrlibrary.umn.edu/research/argentina/jfcc4-cavallo.html>.

²³ Ley N.º 25.779. Promulgada el 2 de septiembre de 2003. BORA. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25779-88140/texto>.

²⁴ Ley N.º 25.778. Sancionada el 20 de agosto de 2003. BORA. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25778-88138/texto>.

²⁵ *Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad*. Aprobado por la Asamblea General de la ONU el 26 de noviembre de 1968. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes>.

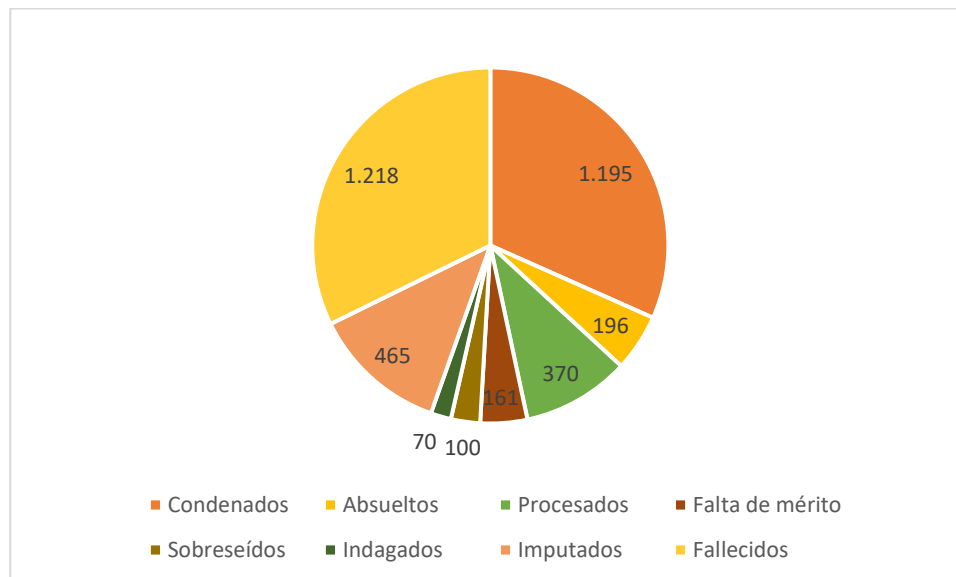
²⁶ https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf.

3.4. Reanudación de los juicios en 2006 e importancia de Argentina en la lucha por los derechos humanos

La actuación conjunta del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, permitieron deshacer los impedimentos jurídicos desarrollados desde 1987 que pretendían frenar el conocimiento de la verdad y condenar a los responsables de los crímenes del régimen del PRN (Donadio, 2022: 102). Así, en 2006 se pudieron reanudar los juicios contra aquellos.

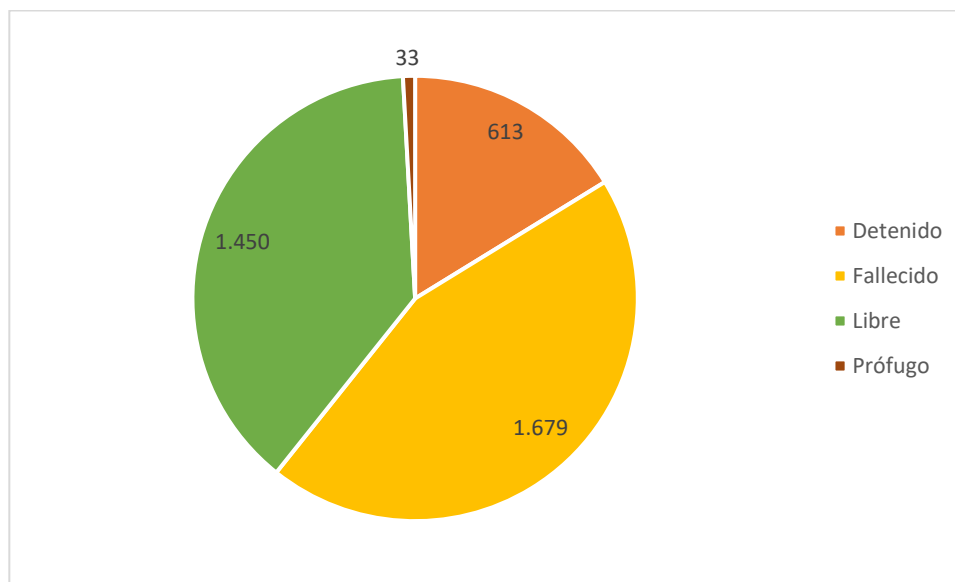
El último informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, fue publicado el 23 de diciembre de 2024. En él, se recoge que, de las 332 sentencias dictadas desde el reinicio de los juicios, se han condenado a 1.195 responsables por crímenes de lesa humanidad de los 3.775 investigados.

Gráfico 6. Investigados por delitos de lesa humanidad según máxima situación procesal alcanzada, a 2 de diciembre de 2024



Elaboración propia, a partir de PCCH (2024).

Gráfico 7. Condición de las personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad, a 2 de diciembre de 2024



Elaboración propia, a partir de PCCH (2024).

175

La labor de la CONADEP permitió comenzar a procesar a los responsables una vez publicado su informe final; pero los juicios se vieron interrumpidos por las leyes de impunidad y, a pesar de su reanudación en el 2006, muchos supuestos criminales fallecieron y fallecerán antes de que se dictamine sentencia sobre los hechos por los que se les investiga. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del informe de la PCCH.

Sin embargo, las reflexiones de Donadio (2022) nos incitan a pensar que la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Argentina nunca retrocedió, ya fuera por la perseverancia de la sociedad, o por su acción conjunta con las instituciones estatales y de justicia, según la situación política. La CONADEP, nacida del reclamo por verdad y justicia de los familiares de los desaparecidos, inició una senda que, aunque fuera obstaculizada durante casi dos décadas, es inexorable. La lucha del pueblo argentino fue colectiva, sintiéndose como un “sujeto pasivo del plan clandestino, preciso, sistemático y organizado de la dictadura” (Donadio, 2022: 108).

La CONADEP es el reflejo de lo que es un país referente en el plano

internacional en cuanto al ámbito de la promoción de los derechos humanos se refiere, siendo uno de los países signatarios en la fundación de la *Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas* de las Naciones Unidas, firmada en 2006. El Equipo Argentino de Antropología Forense ha estado presente en más de cincuenta países, con el fin de cooperar internacionalmente con la recuperación e identificación de personas desaparecidas y asesinadas para que los restos sean entregados a sus familiares, y para aportar evidencias científicas ante los tribunales. También, Argentina ha sido una de las principales defensoras de la inclusión del derecho a la verdad como un derecho inalienable (Donadio, 2022: 110-111).

El último capítulo del informe *Nunca Más* está dedicado a las recomendaciones que la comisión hizo a los organismos estatales, a fin de prevenir, reparar y evitar la repetición de la violación de derechos humanos. Solicitaron que se remitiera a la justicia la documentación recogida para estudiar las denuncias recibidas. Asimismo, remarcaba la necesidad de que se asistiera social y económicamente a los familiares para que tuvieran facilidades a la hora de acceder al mercado laboral o para estudiar. Por último, remarcaban la necesidad de que se sancionaran leyes dirigidas a dar a la desaparición forzada la categoría de crimen de lesa humanidad, enmarcarse dentro de la legislación de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, promover la educación sobre la necesidad de defender y difundir los derechos humanos y, también, derogar toda legislación represiva que aún se encontrara vigente (CONADEP, 1985: 477-478). Todas estas propuestas fueron, aún con todas las obstrucciones, cumplimentadas.

176

Conclusión

Vista cómo fue la puesta en marcha de las comisiones extrajudiciales en estos tres países del Cono Sur, se pueden extraer algunas conclusiones acerca de los diferentes caminos que recorrió la transición democrática y la justicia transicional en ellos.

Uruguay ha sido, seguramente, el país en el que la protección a los militares

que cometieron crímenes de lesa humanidad contra su propia población más ha dificultado la labor de las comisiones y secretarías constituidas. De ello da ejemplo el abandono del GTVJ por parte del colectivo Familiares, y todas las dificultades con las que se encontraron durante su trayectoria, reflejadas en su informe final, que hicieron que los resultados, aunque con avances, no tuvieran el alcance deseado.

No menos exenta de dificultades ha estado la Comisión Valech de Chile, cuyo funcionamiento ha sido obstaculizado desde su propio mandato; pasando por el secreto impuesto hasta 2054, una vez publicado su informe final, hasta que la desclasificación de sus archivos propició una nueva operación de silenciamiento, como lo son las tachaduras sobre información relativa a perpetradores o hechos represivos, dificultando la comprensión de la documentación. Además, la página web de Desclasificación Popular no está disponible en la actualidad, de forma que toda la información que colgaron en línea a disposición del público no puede ser consultada.

El ejemplo de la CONADEP en Argentina es el más esperanzador. A pesar del periodo que comprendió desde la promulgación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta la reanudación de los procesamientos en 2006, el éxito de la comisión fue y es memorable para que la Justicia pueda trabajar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura del PRN. Su formación, papel y legado para conocer la verdad y sentar en los tribunales a los perpetradores, es inseparable de la lucha iniciada, ya en tiempos del régimen, por parte de Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y otros tantos grupos. *Nunca Más* ha traspasado fronteras, y se ha convertido en el lema que reitera la voluntad de garantías de no repetición.

En definitiva, se ha podido observar que las comisiones de investigación extrajudiciales conformadas en Uruguay, Chile y Argentina han atravesado diferentes “operaciones de silenciamiento”, sea por la vía legal o por la reticencia a convertir el acervo documental generado o recopilado en material que pueda servir de base para la justicia y condenar a los agentes estatales y paraestatales responsables de ejercer detenciones ilegales, torturas, asesinatos y demás crímenes de Estado. Pero las diferencias son mayores que los parecidos, y estas se encuentran en la implicación en organismos de derechos humanos y, simultáneamente, con la acción social y la lucha colectiva de sus sociedades por conocer la verdad.

Con esto presente, y analizados los tres casos a lo largo de este trabajo, se puede afirmar que la demanda social, tanto en tiempos del régimen de excepción como posteriormente, es un factor diferencial para la puesta en marcha de investigaciones judiciales que permitan condenar a los perpetradores. En palabras de Michael Pollak, “una vez que las memorias subterráneas logran invadir el espacio público, reivindicaciones múltiples y difícilmente previsibles se acoplan a esa disputa de la memoria” (Pollack, 1989: 5); y es en este aspecto en el que Argentina se diferencia claramente de Chile, donde sigue vigente el secreto sobre los archivos de la CNPPT, y son las propias víctimas las que tienen que entregar su documentación a los tribunales; y, sobre todo, de Uruguay, donde la justicia ha condenado a una ínfima parte de los responsables de ejercer actos de terrorismo de Estado durante más de una década.

Bibliografía

Abrahan Mazzoleni, M., M. Mota Cutinella y M. Risso Fernández (2022): “Uruguay: deudas históricas y desafíos presentes”, en J. A. Mejía Rivera, coord., *Las deudas pendientes de Iberoamérica en materia de memoria, justicia y reparación*. Tegucigalpa: Guaymuras, pp. 61-87.

Andriotti, E. (2013): “Decir la verdad, hacer justicia: Los Juicios por la Verdad en Argentina”, *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 94, pp. 5-23.

Bernasconi, O. y D. Mansilla (2023): “Silencios y verdad oficial. Operaciones de silenciamiento en el caso de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile”, *Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología*, 51, pp. 131-157.

Bernasconi, O., D. Mansilla y R. Suárez (2019): “Las comisiones de la verdad en la batalla de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”, *Colombia Internacional*, 97, pp. 27-55.

Broquetas, M. (2007): “Memoria del terrorismo de Estado en la ciudad de Montevideo (Uruguay)”, *Studia Historica. Historia Contemporánea*, 25, pp. 223-238.

Cañón, L. (2016): “Terrorismo de estado. El sur del continente americano durante la década de 1970. Un caso de transnacionalización del terrorismo estatal”, *Relaciones*

Internacionales, 32, pp. 185-202.

Cañón, L. (2021a): “Desaparición forzada de personas. Intervención directa del Estado en la lucha de clases. Los regímenes capitalistas de excepción en América del sur de los años 70”, en L. Cañón, comp., *Cuando los regímenes de excepción se descomponen. Justicia de transición, memoria y derechos humanos*. Córdoba, Lago Editora, pp. 151-190.

Cañón, L. (2021b): “Espacios de represión y sobrevivientes del terrorismo de Estado en Argentina: Notas a partir de los juicios realizados entre 2006 y 2018”, *Revista del CESLA. International Latin American Studies Review*, 28, pp. 141-160.

CIPDH (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos) (2016): *Operación Cóndor. 40 años después*. Buenos Aires.

Donadio, L. (2022): “La experiencia argentina en la implementación de políticas de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. De una práctica de justicia transicional a un enfoque basado en derechos”, en J. Mejía, coord., *Las deudas pendientes de Iberoamérica en materia de memoria, justicia y reparación*. Tegucigalpa, Guaymuras, pp. 89-113.

Feld, C. (2015): “Imagen y testimonio frente a la desaparición forzada de personas en la Argentina de la transición”, *Kamchatka*, 6 [Avatares del testimonio en América Latina], pp. 687-715.

Leal, F. (2003): “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”, *Revista de Estudios Sociales*, 15, pp. 74-87.

Mansilla, D. (2022): “Secreto, silencio, desclasificación y uso de las declaraciones de las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile”, *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 43, pp. 107-127.

Pollak, M. (1989): “Memória, Esquecimento, Silêncio”, *Revista Estudos Históricos*, 2(3), pp. 3-15.

Richards, K. y R. Wilson (2017): “Truth and Reconciliation Commissions: Anthropological Perspectives”, en H. Callan, ed., *The International Encyclopedia of Anthropology*. Hoboken, Wiley-Blackwell.

Tapia, J. (1980): *El terrorismo de Estado: La Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur*. México D. F., Nueva Sociedad y Editorial Nueva Imagen.

Fuentes

BCN (Biblioteca del Congreso Nacional) (2004): *Historia de la Ley N° 19.992*. Santiago, Biblioteca del Congreso Nacional. Disponible en:

<https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/2452/1/HL19992.pdf>

CNPPT (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura) (2005): *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I)*. Santiago, Ministerio del Interior. Disponible en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/items/77e102d5-e424-4c60-9ff9-70478e618d78>

COMIPAZ (Comisión para la Paz) (2003): *Informe final de la Comisión para la Paz*. Montevideo, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO). Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/146-2003/3>

CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (1985): *Nunca más: informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Barcelona, Seix Barral

GTVJ (Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia) (2019): *Informe final*. Disponible en: <https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/noticias/Informe%20final%20Grupo%20de%20Trabajo%20por%20Verdad%20y%20Justicia.pdf>

PCCH (Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad) (2024): *Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina*. Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal y Procuración General de la Nación. Disponible en: <https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/son-1-195-las-personas-condenadas-por-crimes-de-lesa-humanidad-en-332-sentencias-dictadas-desde-2006/>

Presidencia de la República (2007): *Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos*. Montevideo, IMPO. Disponible en: https://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo1.pdf

Valech II (Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura) (2011): *Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II)*. Disponible en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/items/b1c30660-a5f3-467d-a571->

d39b109d9645

Vera, L. (2020): “Manini Ríos propone que se vuelva a la Ley de Caducidad”, *Radio Monte Carlo*, 31 de julio. Disponible en:
<https://www.radiomontecarlo.com.uy/2020/07/31/nacionales/manini-rios-propone-que-se-vuelva-a-la-ley-de-caducidad/> [Consultado el 1 de mayo de 2025]

Anexo: legislación

Uruguay

Decreto N.º 131/015. Promulgado el 25 de mayo de 2015. “Creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”. IMPO. Disponible en:
<https://www.impo.com.uy/bases/decretos/131-2015>

Ley N.º 15.737. Promulgada el 8 de marzo de 1985. “Ley de Amnistía. Aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica. Creación de la Comisión Nacional de Repatriación”. IMPO. Disponible en:
<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15737-1985>

Ley N.º 15.848. Promulgada el 22 de diciembre de 1986. “Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. IMPO. Disponible en:
<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15848-1986/1>

Resolución N.º 858/000. Promulgada el 9 de agosto de 2000. “Creación de la Comisión Nacional para la Paz”. IMPO. Disponible en:
<https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/858-2000>

Resolución N.º 463/013. Promulgado en 1 de agosto de 2013. “Derechos humanos – Cambio de denominación Secretaría de Seguimiento de funciones de Comisión para la Paz por Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente”. IMPO. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/463-2013>

Chile

Ley N.º 19.992. Promulgada el 17 de diciembre de 2004. “Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica”. Diario Oficial. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=233930>

Argentina

Ley N.º 23.049. Sancionada el 9 de febrero de 1984. “Código de Justicia Militar. Modificaciones”. BORA. Disponible en:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23049-28157/texto>

Ley N.º 23.492. Sancionada el 23 de diciembre de 1986. “Dispónese la extinción de acciones penales por presunta participación, en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley N.º 23.049 y por aquellos vinculado a la instauración de formas violentas de acción política. Excepciones”. BORA. Disponible en:

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm>

Ley N.º 23.521. Sancionada el 8 de junio de 1987. “Fuerzas Armadas. Delimita alcances del deber de Obediencia Debida”. BORA. Disponible en:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23521-21746>

Ley N.º 25.778. Sancionada el 20 de agosto de 2003. “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”. BORA. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25778-88138/texto>

Ley N.º 25.779. Sancionada el 21 de agosto de 2003. “Declárense insanablemente nulas las Leyes Nros. 23.492 y 23.521”. BORA. Disponible en:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25779-88140/texto>

Fecha de recepción: 9 de septiembre de 2025

Fecha de aceptación: 27 de octubre de 2025